

## **POLÍTICA – LEGITIMIDAD**

En el siguiente trabajo se estudiarán los incentivos y legitimidad que poseen el Gobierno colombiano y las Fuerzas Armadas de Revolucionarias de Colombia- Ejército del Pueblo (FARC-EP) para negociar nuevamente un fin al conflicto armado. El periodo de tiempo en el que se centrará este trabajo será desde las negociaciones del Caguán en 2002, con el Presidente Andrés Pastrana, hasta las más recientes negociaciones de paz a mediados de 2012, con el Presidente Juan Manuel Santos. El estudio se dividirá en 4 partes, la primera es una breve introducción histórica a la violencia y el conflicto armado dentro del estado colombiano, la segunda parte es un estudio de los incentivos económicos y políticos de las partes para negociar la paz en 2012, como tercera parte presentaremos la legitimidad de los argumentos de las partes en las negociaciones y como último segmento se presentarán las conclusiones del trabajo. Es importante aclarar, que en la tercera parte, al decir que se estudiará la legitimidad de las partes en los procesos de paz no se hace referencia a si es legítimo o no que sean el gobierno y las FARC-EP quienes negocien las paz, si no a la legitimidad de sus incentivos y la congruencia entre las propuestas y las acciones de cada quien.

### **Antes de las negociaciones de paz del 2012**

La obra de Marcos Palacios, *Entre la legitimidad y la violencia: Colombia 1875-1994*, da una clara imagen de como la violencia en Colombia existe desde la creación del país y como esta ha tomado diferentes formas y manifestaciones a lo largo del tiempo. En esta obra observamos como la legitimidad está ceñida a los mecanismos fundados por el sistema político para mantener el poder. Colombia. Se puede argumentar que una de las múltiples razones para la violencia en la Colombia es la diversidad de intereses en la sociedad y la incapacidad de representación de los partidos políticos. Es así como los partidos políticos tradicionales, el liberal y conservador, durante el siglo XIX se caracterizaron por defender diferentes ideales de estado y no por ser partido representativos. Mientras estos partidos se anclaban en discusiones como la secularización del estado, Colombia sufría cambios vertiginosos a nivel económico y social. La ambición política y la creencia que cada partido tenía la mejor ruta nacional legitimaron la violencia en buena parte del siglo XIX. Como pico del conflicto entre liberales y conservadores se puede observar la guerra de los mil días. La guerra civil comienza luego de que los conservadores le dan un golpe de estado al presidente liberal, Manuel Antonio Sanclemente en 1900. Uno de los aspectos que llama más la atención de la guerra de los mil días es que fue la primera vez que aparecían guerrillas organizadas en el país, pues hubo un enfrentamiento irregular entre el ejército del gobierno (conservador) apropiadamente entrenado y un ejército de guerrillas (liberal) sin entrenamiento y disperso. A mediados del siglo XX se crea el Frente Nacional, una coalición política y electoral entre liberales y conservadores efectiva entre 1958 y 1974. El Frente Nacional funcionó con la idea de que liberales y conservadores se turnaran el poder ejecutivo cada 4 años y una distribución igualitaria de en la cantidad de parlamentarios liberales y conservadores en el congreso. Lo que favoreció a que la cultura política presente dificultades estructurales para la participación de la oposición. Oponiéndose a la heterogeneidad de la población y a la expresión de otras opiniones distintas a las de las élites. No es sorpresa que en este periodo de tiempo aparezcan las FARC, el Ejército de

Liberación Nacional (ELN) y el Ejército Popular de Liberación (EPL) como alternativa política que representara a algunos sectores marginados. Otra característica que ha propiciado y legitimado la violencia ha sido la geografía colombiana. No solamente es el cuarto país más extenso de Sudamérica (1.141.748 km<sup>2</sup>), sino que presenta un complejo relieve conformado por la cordillera de los Andes, selvas Amazónicas, llanuras y desiertos. Esto sumado a la escasez de caminos que ha prevalecido durante la mayoría de la historia Colombiana, favoreció el caudillismo regional y la ausencia (total o parcial) del gobierno en zonas del territorio nacional. Como es característico de otros países de América Latina quienes detentaban la tierra eran virtuales señores feudales y se valían de sus recursos económicos para concentrar poder político. Esta estructura ha sido heredada y aplicada por grupos paramilitares y narcotraficantes, quienes han tomado control de municipios completos tanto militar como políticamente. Un ejemplo que ilustra esto sería Pablo Escobar en la ciudad de Medellín. Si bien Medellín no pertenece a la zona rural colombiana y existía una presencia gubernamental importante. Pablo Escobar se valió de sus recursos para permear la esfera política medellinense (electo senador de la república en 1982) y proteger así su patrimonio. Como último factor generador de violencia consideraremos la salida coercitiva del estado ante la disyuntiva presentada por la oposición política, grupos guerrilleros e inclusive grupos organizados de la sociedad civil. Demandas y carencias de la sociedad presentadas por estas agrupaciones en lugar de recibir una respuesta integral del gobierno han sido cohibidas mediante el uso de la represión estatal. Se puede tomar el ejemplo de la masacre bananera de 1928 en la un número, aún indeterminado de huelguistas, fue asesinado por un regimiento del ejército colombiano. También se puede ejemplificar esto con el asesinato y persecución de los miembros del partido político de la Unión Patriótica (UP), durante las décadas de 1980 y 1990. Sin embargo, grupos paramilitares también ejercen una política coercitiva en las áreas de su control, muchos de ellos utilizan la intimidación para obtener el silencio o complicidad de los habitantes de sus zonas de influencia. Dicho esto es necesario comprender el conflicto colombiano como un proceso histórico que ha estado presente desde la independencia de esta nación. Igualmente las demandas y condiciones propuestas están fundamentadas en la experiencia de las contrapartes. De esta forma los incentivos para alcanzar la paz encuentran sus raíces en la necesidad de solventar los problemas estructurales que han acompañado al país desde sus inicios. Tomando las palabras del especialista francés, Daniel Pecaute, Colombia ha vivido en “la coexistencia del orden y la violencia”.

### **Incentivos**

A grandes rasgos se puede identificar que los principales incentivos políticos del gobierno y las FARC-EP son, respectivamente, la reelección del presidente Santos y el reconocimiento de las FARC-EP como una fuerza política civil con garantías. Primero nos referiremos al gobierno de Santos, analizando los potenciales beneficios de la firma de un acuerdo de paz y luego nos centraremos en la guerrilla.

Las encuestas de finales de julio y comienzos de agosto reflejan un balance negativo para la popularidad del presidente Juan Manuel Santos. La imagen del gobierno de Santos fue golpeada luego del atentado en contra de Fernando Londoño (ex-ministro de justicia del primer gobierno de Alvaro Uribe) a pesar de las mejoras en seguridad heredadas del gobierno anterior, el atentado sumado al aumento de la actividad guerrillera, contribuyeron

a aumentar la sensación de seguridad dentro de la población. Otro golpe a la popularidad del gobierno fue el fracaso de la reforma a la justicia (junio 2012), que con el apoyo del gobierno fue aprobada en el Congreso, mas luego fue archivada en una sesión extraordinaria. Esto mostró una disminución significativamente del apoyo parlamentario al gobierno y puso en jaque a la coalición oficialista Unidad Nacional. También la figura de ex-presidente se ha convertido en oposición y agrupa a diferentes sectores de la izquierda. De esta forma a finales de julio del 2012 la popularidad del presidente Santos bajaba del 50% y el rechazo estaba en pleno aumento. Sin embargo, luego del comienzo de las negociaciones en Oslo, en agosto del 2012, Santos tuvo un repunte importante. La opinión favorable escaló súbitamente a un 57% y el rechazo bajó a un 38%.

Un eventual fin del conflicto armado también permitiría que se liberen fuerzas del ejército anteriormente utilizadas para combatir a las FARC-EP. Así se podría combatir con mayor eficiencia al resto de grupos armados dentro del territorio colombiano. Así el gobierno no solamente detendría a los grupos armados pero también limitaría seriamente la influencia de los gobiernos locales aliados con estos grupos armados. Esto permitiría al gobierno colombiano recuperar control sobre zonas sobre las que aún no tiene control. No existe consenso en cuanto al número de municipios dominados por entidades no estatales. Sin embargo, mediante cifras del Ministerio de Defensa, se puede estimar la presencia policial en el territorio nacional. Los datos del ministerio indican que la policía nacional no tiene presencia en el 10% del territorio colombiano. En materia fiscal se estima que la reducción en gastos de seguridad permita bajar los impuestos y una aceleración del crecimiento entre un 1% o 2% anual.

El hecho de que las FARC-EP estén negociando el fin de la violencia podría reflejar un interés legítimo por alcanzar un acuerdo con el gobierno. No obstante la posición agresiva del gobierno de los últimos 10 años, ha diezmando los ingresos, miembros y territorio de las FARC-EP. Y permite considerar que la razón detrás de negociar es, en realidad, una estrategia de supervivencia. Estimaciones del gobierno indican que la guerrilla en 2010 contaba con alrededor de 8000 miembros, mientras que en el 2002 contaba con 14.500. Se puede notar el debilitamiento de las FARC-EP observando su cambio en el modo de operar. Después del 2008 la guerrilla pasó de la confrontación directa a realizar ataques “relámpago” a blancos clave. Sus ataques se centran en unidades de la fuerza pública e instalaciones petroleras, mineras y de generación energética. A pesar de encontrarse la guerrilla en una clara inferioridad militar, las FARC-EP no se encuentran en un riesgo inminente de desaparecer en un corto o mediano plazo. Los esfuerzos del ejército no han sido suficientes para cortar los ingresos de la guerrilla, que provienen generalmente de la extorsión a empresas mineras y energéticas y del comercio y cultivo de drogas. Además cuenta con importantes zonas de refugio en las zonas fronterizas con el Ecuador y Venezuela. Es así que aunque no sea absolutamente claro se puede argumentar que uno de los principales incentivos de las FARC-EP es obtener derechos de participación política.

Esta idea la refuerzan dos de los seis puntos de la agenda de negociaciones. Uno siendo la “participación política” y el otro “el fin del conflicto”. El primer punto busca obtener garantías políticas para una eventual participación de las FARC-EP y sus simpatizantes. Es imperante para FARC-EP alcanzar un amplio marco legal que las proteja, con el fin de evitar una masacre similar a la ocurrida con la Unión Patriótica.

Sobre este punto existe una tensión y ese es la pregunta de ¿Qué hacer con respecto a los derechos de participación política de aquellos líderes involucrados con delitos de violación a los derechos humanos?

El segundo punto se ocupa de asuntos delicados para ambas partes. “El fin del conflicto”, tal como se ha definido en la agenda, establece como objetivos:

- Cese al fuego y de hostilidades bilateral y definitivo.
- Dejación de las armas. Reincorporación de las FARC-EP a la vida civil.
- El combate del Gobierno Nacional para acabar con organizaciones criminales responsables de homicidios, o que atenten contra movimientos sociales o políticos.
- Garantías de seguridad durante el proceso.

Pese al interés de las FARC-EP para garantizar la supervivencia política de la organización, otro incentivo de peso es convertirse en el movimiento que congregue a la izquierda colombiana. Suponiendo que la guerrilla obtengan las garantías y derechos necesarios para organizar un partido político y que obtengan reivindicaciones para la población rural e indígena (el grueso de su apoyo). En un mediano plazo sería dificultoso estigmatizar a los partidarios de la izquierda como, “simpatizante de la guerrilla”. Que ex-guerrilleros hayan sido electos presidentes en otros países latinoamericanos abre la posibilidad de que exdirigentes de las FARC-EP tomen un papel cada vez más importante en la política colombiana.

### **Legitimidad**

Como legitimidad entenderemos a la coherencia de las actuaciones de las partes con respecto a sus demandas. Para analizar esta parte tomaremos en cuenta las condiciones con las que se iniciaron las negociaciones y los negociadores representantes de las partes. La legitimidad de las FARC-EP se ve debilitada por la falta a sus compromisos y sus posibles nexos con el narcotráfico. La guerrilla afirmó detener de manera oficial la toma de secuestrados y liberó sus últimos rehenes uniformados en abril y mayo de 2012. Sin embargo no hay evidencias de que hayan liberado a todos los civiles bajo su poder. Además el gobierno sostiene la tesis de un involucramiento de las FARC-EP dentro de la producción comercialización de drogas. Pero lo único que ha aceptado la guerrilla es beneficiarse de impuestos cobrados a productores dentro de su área de control. Por otra las FARC-EP ganan legitimidad por su intención no solo de negociar garantías y derechos políticos pero también un cambio en políticas públicas (sobre todo en cuanto la distribución de la tierra). De la misma manera la guerrilla declaró 19 de noviembre un cese al fuego unilateral, entre el 20 de noviembre de 2012 y el de 20 de enero de 2013. Ante el cese al fuego el gobierno se mostró escéptico y dijo continuar con sus operaciones militares sin importar esta decisión.

La única debilidad que presenta el gobierno colombiano es posiblemente la el exterminio de los integrantes de la unión patriótica en la década de 1980. Esto no solo le ha restado apoyo dentro de los simpatizantes de la izquierda sino que ha hecho que las FARC-EP tengan una preocupación especial en obtener garantías en caso de una eventual paz. El gobierno goza de amplia legitimidad pues goza de un vasto apoyo popular. Según encuestas de la firma Detexco Company la imagen favorable del presidente Juan Manuel Santos

aumentó en 18 puntos hasta el 62,97% tras su anuncio de iniciar un proceso de paz con las FARC. De acuerdo con esta empresa el 67,35% de los colombianos considera adecuado el manejo de Santos de las negociaciones de paz, mientras que un 26.8%. Sin embargo, el 45% de los encuestados no espera un acuerdo de paz definitivo frente a un 41,6% que sí.

La delegación de las FARC está liderada por Luciano Marín Arango, alias “Iván Márquez”. Él representa una línea ideológica dura y crítica frente a los procesos de paz. Los demás plenipotenciarios también pertenece a la cúpula política de guerrilla. Entre ellos se encuentran, Rodrigo Granada, alias “Ricardo Gonzales”, quién fue capturado en 2004 pero liberado gracias a las negociaciones del gobierno francés por obtener la libertad de Ingrid Betancourt. Jesús Emilio Carvajalino, alias “Andrés París”, miembro de la comisión internacional y del Estado Mayor de la guerrilla. Luis Alberto Albán, alias “Marco León Calarcá” representante de las FARC-EP en México hasta su expulsión en 2002. Él estuvo presente en todas las negociaciones de paz a partir de la década de 1980. Finalmente Juvenal Ovidio Ricardo Palmera, alias “Simón Trinidad” es el antiguo comandante del bloque Caribe y está cumpliendo una condena de 60 años en prisión en Estados Unidos por terrorismo. Con Simón Trinidad las FARC-EP esperan un efecto publicitario puesto que rechazan de manera contundente las extradiciones a ese país. Del resto de los miembros se puede decir que aunque no todos presentan un expediente “limpio”, el hecho de enviar hombres más “políticos” y no militares realza la legitimidad de la guerrilla ya que da un mensaje de interés en encontrar una solución política al conflicto.

El jefe del equipo negociador del gobierno es Humberto de la Calle. Él fue ministro en la administración de Cesar Gaviria (1990-1994) y Andrés Pastrana (1998-2002). También formó parte de la Asamblea Constituyente de 1991 y defendió la reincorporación de movimiento 1 de abril a la esfera política. Sergio Jaramillo fue viceministro de seguridad de Uribe y comisionado para la paz del presidente Santos. A Jaramillo se le considera el autor de la política de seguridad de Uribe y ha sido colaborador del “Marco Legal para la Paz”, aprobado en julio del 2012. Frank Pearls alto comisionado para la Paz y alto consejero presidencial para la Reintegración durante el mandato de Uribe. Actualmente desempeñó como ministro de Ambiente y Desarrollo del gobierno de Santos.

Jorge Mora Rangel, Comandante del Ejército Nacional durante el cuatrienio de Pastrana (1998 - 2002) y de las Fuerzas Militares durante el primer año del gobierno de Uribe. Finalmente, Luis Carlos Villegas el actual presidente de la Asociación Nacional de empresarios desde 1996. Así el gobierno envía una delegación cercana al presidente Santos, en la que tratan de representar el sector político, el militar y el empresariado. Un sector que no se encuentra representado por ninguna de las partes es la sociedad civil. A pesar de haberse manifestado la intención incluirlos en las negociaciones todavía no se ha hecho

## Conclusiones

Uno de los principales retos del trabajo fue la recolección de datos. Lo reciente del tema limita el acceso trabajos académicos que puedan aportar de manera directa a la investigación. Por otra parte la información sobre el gobierno fue accesible mediante diarios y páginas web oficiales Al contrario información sobre las FARC-EP resultó ser relativamente escasa y nunca 100% confiable, pues al no haber una fuente oficial del guerrilla la mayoría de datos son estimaciones.

La historia de Colombia resulta clave para comprender el conflicto. Pareciera a veces que el conflicto ha continuado a lo largo del tiempo, solamente con cambios en las partes beligerantes. Si comparamos la actual situación con la de finales del siglo XIX vemos que todavía hay un actor luchando por garantías y derechos políticos (antes guerrilla liberal, ahora las FARC-EP) y uno por mantener su hegemonía en el poder (antes partido conservador, ahora el gobierno del presidente Santos). Igualmente incentivos como la recuperación del control del gobierno sobre el territorio colombiano y las luchas por la redistribución del poder y la tierra aún son bandera de los grupos insurgentes.

Posiblemente fue el hecho que la guerrillera está en una clara desventaja militar lo que llevó a las partes a la mesa de negociación. Sin embargo, sus acciones muestran un importante grado de legitimidad. Esto por los compromisos mutuos que han asumido y los equipos altamente calificados que han enviado a negociar.

Probablemente el presente trabajo presente sus limitaciones a la hora de comprender las negociaciones de paz como un todo. Por esta razón para tener un óptica más amplia este visto dentro del junto de ensayos presentados por (De) Construyendo la Paz en Colombia. Grupo del Observatorio Político de América Latina y e Caribe (OPALC) de Sciences Po.

Las probabilidades de alcanzar un acuerdo nunca habían sido tan altas. No obstante tampoco es claro si habrá acuerdo o no. Lo importante es que no solamente las FARC-EP obtenga representación política y el gobierno propague el estado del orden sino que resuelvan los problemas de fondo que crearon el conflicto. De esta forma, de haber humo blanco, no solo habrá un fin al conflicto armado, habrá paz en Colombia.

## **Bibliografía**

### Fuentes Primarias

<http://www.elespectador.com/noticias/politica/articulo-215214-farc-y-eln-tienen-menos-de-10000-integrantes-dice-el-gobierno> (miembros de las FARC)

<http://www.semana.com/nacion/articulo/popularidad-santos-crece-18-tras-anuncio-dialogos-paz/265497-3> (popularidad de Santos)

Acuerdo General para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera, firmado

### Fuentes Secundaris

ECHANDÍA CASTILLA Camilo, El fin de la invulnerabilidad de las FARC: el estado actual del conflicto armado en Colombia, la revista Nueva Sociedad No 217, septiembre-octubre de 2008.

MATHIEU Hans, ¿Paz para Colombia? Algunos avances en un camino sinuoso, revista Nueva Sociedad No 242, noviembre-diciembre de 2012

PIZARRO LEÓNGOMEZ Eduardo, Colombia. El proyecto de seguridad democrática de Álvaro Uribe, Revista de Ciencias Sociales América Latina Hoy Nº 32, Diciembre 2002 Salamanca

VARGAS VELÁSQUEZ Alejo, La influencia de los poderes ilegales en la política colombiana, revista Nueva Sociedad No 225, enero-febrero de 2010

VARGAS VELÁSQUEZ Alejo, El sistema político colombiano al inicio del gobierno de Santos, revista Nueva Sociedad No 231, enero-febrero de 2011

Otras Fuentes

Dossiers de la OPALC, Cronología de eventos 15-19 de noviembre.  
en el 26 de agosto de 2012 en la Habana, Cuba